

## **Cesión de datos de minusvalía. Informe 012/2006**

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la comunicación por la Consejería consultante de determinados datos a un determinado ayuntamiento, dada la incidencia de dicha información a efectos fiscales.

Con carácter general, debe coincidirse con la Administración consultante en el hecho de que la comunicación de los datos no puede encontrarse amparada en lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, dado que las competencias de las administraciones cedente y cesionaria no sería coincidentes en este caso.

Dicho lo anterior, con carácter general, debe recordarse que el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Esta regla sólo podría excepcionarse en los supuestos contemplados en el apartado 2 del citado artículo.

Mención separada merecería el dato referido a la minusvalía del afectado, que la Agencia Española de Protección de Datos y la doctrina emanada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han venido considerando como dato relacionado con la salud de las personas. Respecto de dichos datos, el artículo 7.3 establece una regla más restrictiva que la establecida en el artículo 11, al disponer que “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”.

Dicho lo anterior, la cesión de los datos podría efectuarse, dado que la consulta dispone que no se cuenta necesariamente con el consentimiento de los afectados, en caso de que exista una norma con rango de Ley que otorgue cobertura a la cesión.

En el presente caso, no puede considerarse que el mero hecho de que las normas tributarias de ámbito local establezcan una determinada exención o deducción resulte suficiente para considerar sin más que dichas previsiones habilitan la cesión de los datos, dado que será el propio afectado, beneficiario de la exención o deducción, quien deberá invocar la concurrencia en el mismo de la causa de la exención o deducción.

En este sentido, y aunque no se refiera expresamente al supuesto planteado, debe recordarse lo dispuesto, en relación con la solicitud de certificaciones tributarias y de seguridad social para cualquier supuesto en que deban aportarse en solicitudes o comunicaciones, en los apartados 3 y 4 de la Disposición Adicional decimoctava de la Ley 30/1992, añadida por artículo 68.3 de Ley 24/2001, de 27 diciembre, que establecen:

“3. La aportación de certificaciones tributarias o de Seguridad Social junto con las solicitudes y comunicaciones a que se refieren los apartados anteriores se sustituirá, siempre que se cuente con el consentimiento expreso de los interesados, por la cesión de los correspondientes datos al órgano gestor por parte de las Entidades competentes.

4. Lo dispuesto en la presente disposición se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la presente Ley, en la vigente normativa sobre firma electrónica y en las correspondientes normas de desarrollo.”

Como puede comprobarse, las normas citadas serían de aplicación a supuestos en los que la aportación de la certificación fiscal o de la seguridad social resultase necesaria en el marco de un determinado procedimiento, para la obtención de un determinado acto beneficioso para el afectado.

No obstante, en estos supuestos, similares al aquí analizado, la comunicación únicamente sería posible en caso de contarse con el consentimiento del interesado, que además deberá ser, en virtud de lo dispuesto en la propia Ley 30/1992, expreso.

En consecuencia, la Ley 30/1992 ha considerado que el mero reconocimiento por la Ley de un beneficio para el afectado no implica por sí solo una autorización para la comunicación al mismo de sus datos de carácter personal, sino que dicha comunicación deberá fundarse en el otorgamiento por el afectado de su consentimiento expreso a la comunicación. En caso de no querer prestar dicho consentimiento, será el propio afectado quien deba aportar la información referente a la concurrencia en el mismo de la circunstancia que afecte a la obtención del correspondiente beneficio.

De este modo, en relación con la primera de las cuestiones planteadas, cabe concluir que la cesión de los datos planteada en la consulta únicamente sería posible, con carácter general, en caso de contarse con el consentimiento de los afectados.

No obstante, en caso de que los datos sean solicitados a fin de proceder a la comprobación de la concurrencia en un afectado concreto de los requisitos necesarios para la obtención de la exención o deducción planteada, podría resultar aplicable al supuesto lo dispuesto en el artículo 93.1 de la Ley General Tributaria, según el cual “Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas”.

En particular, en relación con este punto, añade el artículo 94.1, párrafo primero, que “Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones”.

En relación con la segunda de las cuestiones planteadas, ciertamente no existe una norma que dé respuesta directa a la cuestión planteada. En este punto, el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone en su párrafo primero que “No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto”.

Esta norma puede considerarse aclarada y complementada, en lo referente a los datos relacionados con la salud de las personas, por lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, según el cual “El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones”.

A su vez, el apartado 1 del citado artículo 16 dispone que “Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia”.

A la vista de lo dispuesto en los preceptos transcritos, la gerencia del centro podría acceder a los datos referentes al nivel de minusvalía de los residentes en tanto ello se fundase en su participación en la prevención y diagnóstico o, en caso contrario, en cuanto resultase necesario para el ejercicio adecuado de las funciones administrativas del centro y para la ordenación de la actividad del mismo.